LIBRETA DE FAMILIA. Valor probatorio del vínculo matrimonial.

La libreta de familia es un instrumento público que prueba acabadamente el vínculo matrimonial*.

Fernández, Carlos S.

Rosario, 21 de octubre de 1978.

Considerando: para acreditar el vínculo matrimonial que la uniera con el causante, la promotora de esta declaratoria de herederos presentó copia auténtica de las fojas pertinentes de la libreta de familia otorgada por el Registro Civil de la 4a. Sección de esta ciudad.

La Fiscal actuante en sede inferior sostuvo tempestivamente que tal vínculo no se encontraba legalmente probado, alegando que el D.L. 8.204/63 otorga carácter de instrumento público a las libretas de familia sólo en el caso de no poder presentarse los respectivos testimonios, copias o certificados, según surge de su orden en la enunciación que efectúa el art. 14.367. En abono de su tesis abunda en consideraciones tendientes a demostrar el carácter supletorio de la documentación impugnada.

El juez a quo, con atinados fundamentos que esta Sala comparte, tiene por

(*) NOTA A FALLO

Con el fallo anotado, viene a consolidarse, de manera prácticamente definitiva, la admisión de las libretas de familia con idéntico valor probatorio que las partidas.

Y utilizamos el término "definitiva" porque la Sala Tercera viene a sumarse a la Cuarta y a la Segunda, que con anterioridad, y en ese orden, sentaron tal criterio¹. Se ha conseguido así la mayoría necesaria.

Es de esperar que de ahora en más, en todos los Juzgados de Primera Instancia del fuero se acepte esta tesisura, —por razones de economía procesal, aunque sus titulares no las compartieran— y se haga así "usus fori" de todos los días.

1) Sala Cuarta, 20-9-76, "in re" Campodónico, Juan - suc. en J.A., 1977-I-598, con nota nuestra intitulada "Libretas de familia reemplazando a partidas en juicios sucesorios", y también en L.L., 1977-A-425, con nota de Julio I. Lezana, intitulada "El valor probatorio de la libreta de familia".
Sala Segunda, 28-9-77, "in re" Micucci de Villar, Plácida, - suc., en "Juris", 54, J-106, y también en "Zeus", 12, J-352.

acreditado el vínculo sucesorio con los elementos aportados, en decisión que es apelada por la representante del Ministerio Público.

Ya en esta sede, el Fiscal de Cámara expresa agravios sosteniendo la misma tesitura que su inferior, haciendo especial hincapié en que no se ha invocado en autos la imposibilidad de acompañar las partidas pertinentes, por lo que no resultan aplicables las normas contenidas en el art. 24 del D.L. 8.204/63, imperando sobre ellas las disposiciones contenidas en los arts. 80, 85 y 263 del Código Civil, y 96 y 97 de la Ley de Matrimonio Civil.

Sin hacer juicio valorativo sobre la bondad del régimen legal durante los últimos años en torno a la proliferación y adulteración de libretas de matrimonio, cabe destacar que la normativa vigente no admite duda alguna acerca del carácter probatorio —con fuerza de instrumento público— de ellas.

En efecto: en cuanto al vínculo conyugal, dispone el art. 96 de la Ley de Matrimonio Civil que “los matrimonios... se probarán con el acta de celebración o su testimonio”, agregando el art. 97 que “si hubiera imposibilidad de presentar el acta o su testimonio, se admitirán todos los medios de prueba... que no se recibirán sin que previamente se justifique la imposibilidad”.

Tan claro régimen probatorio fue ampliado a través del art. 24 del D.L. 8.204/63 (ADLA, 1963 —C— p. 1.799), ratificado por ley 16.478 (ADLA, 1964 —C— p. 1.986) y modificado por ley 18.327 (ADLA, 1969 —C— p. 2.620), de donde resulta que “los testimonios, copias, certificados, libretas de familia,

Parece mentira que haya costado tanto imponerse una jurisprudencia que no hace más que cumplir con una clara ley nacional. Aquí no hay nada de derecho pretoriano, equidad en la función judicial, interpretación problemática de la ley, interpretación derogatoria, interpretación teleológica, ni cabe la utilización de otro vocablo análogo que quiera expresar la idea de esfuerzo heroico dentro de la función jurisdiccional.

Se trata del art. 24 del decreto-ley 8.204/63, ratificado por ley 16.478 y modificado por ley 18.327, y nada más. Como dijera Lezana en carta personal enviada al autor de esta nota, fechada el 10 de diciembre de 1976: “el valor probatorio de la libreta de familia,... solamente se puede discutir cerrando los ojos ante las nuevas disposiciones legales”.

El origen de esta jurisprudencia muestra la repercusión que pueden tener, y de hecho tienen, los trabajos doctrinarios en el progreso del Derecho. Todo empieza con un artículo de Lezana, publicado en 1975², que motiva a un abogado de Rosario a plantear el problema en un proceso sucesorio, que culmina con la sentencia de la Sala IV. Luego sigue la Sala II. Y ahora la III. Más todavía, es un orgullo para Rosario, y para toda la Provincia de Santa Fe, que

2) Lezana, Julio I., “La libreta de familia como prueba del matrimonio y la filiación”, en L.L., 1975-B-1.306.

o cualesquiera otros documentos expedidos por la Dirección General o sus dependencias, que correspondan a inscripciones registradas —(lo que se comprende con el texto literal y expreso del art. 263 del Código Civil)—... y que lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido, en los términos prescritos por el Código Civil”.

Obvio es remarcarlo, la presunción de verdad que emana de la fuerza de instrumento público que ostenta la libreta de familia, le otorga a ésta carácter probatorio principal y no supletorio, de donde resulta que su presentación en juicio es suficiente para acreditar el vínculo conyugal invocado.

Abundando en lo expuesto, es de destacar que idéntica tesis interpretativa han adoptado la Sala II de ésta Cámara, en sentencia n° 249 del 28/9/77 (Autos: “Micucci de Villar, Plácida s. declaratoria de herederos”) y la Sala IV de la misma Cámara (v. J.A., Bol. del 2/3/77).

Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, **Resuelve:** Confirmar la decisión recurrida, en cuanto fuera materia de apelación. **Alvarado Velloso. — Casiello. — Isacchi.**

esta jurisprudencia haya comenzado a hacer escuela en la Capital Federal, ya que fue aceptada por un Juzgado en lo Civil, en sentencia confirmada por la prestigiosa Sala C de la Cámara Nacional Civil³.

No vale la pena que nos extendamos más en el fondo del asunto, pues ya hemos expuesto los argumentos en nuestros anteriores trabajos sobre el tema⁴. Concluimos ya, uniéndonos a los demás colegas, en el deseo de que esta actitud obstruccionista de exigir partidas que la ley no exige termine de una buena vez, luego del incontestable fallo que anotamos.

3) Juzgado Civil Primera Instancia Capital Federal, 8-9-77, confirmado por Sala C de la Cám. Nac. Civil, el 9-3-78, en E.D. del 9-6-78, fallo n° 30.743.

(Cita expresamente el fallo de la Sala IV de Cám. Com. Rosario, que mencionamos en nota 1).

4) V. el comentario que mencionamos en nota 1. Además, con fines de divulgación, salió un artículo en “La Capital”, del 24 de noviembre de 1976, intitulado “Libretas de familia en lugar de partidas”.

OMAR U. BARBERO